

573-14

TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORIA DEL CONSUMIDOR; Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a las diez horas del día treinta de abril de dos mil quince.

A sus antecedentes el escrito firmado por la licenciado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, presentado el día veintidós de diciembre del año dos mil catorce, junto con sus anexos de folios 13 al 16.

El presente procedimiento administrativo sancionador, registrado con referencia 573-14, se instruyó por denuncia interpuesta por la Presidencia de la Defensoría del Consumidor, en aplicación del artículo 143 letra d) de la Ley de Protección al Consumidor –en adelante LPC–, contra la sociedad Los Ranchos de El Salvador, S.A. de C.V., con Número de Identificación Tributaria xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, propietaria del establecimiento denominado “xxxxxxxxxxxxxxxx”, ubicado en xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en el municipio y departamento de San Salvador, por supuesto incumplimiento a la prohibición contenida en el artículo 14 de la LPC.

Leído los autos; y, considerando:

I. Con fecha veinte de septiembre de dos mil trece, en ejercicio de lo dispuesto en el artículo 58 letra f) de la Ley de Protección al Consumidor, se practicó inspección en el establecimiento antes mencionado, a efecto de verificar el cumplimiento de las obligaciones que la ley de la materia impone a los proveedores. Como resultado de la diligencia realizada, se levantó el acta de las quince horas con diez minutos de la fecha antes relacionada -agregada a folios 2-, junto con su anexo uno denominado Formulario para Inspección de Fechas de Vencimiento, en el cual se detallaron productos vencidos a disposición de los consumidores.

Según lo expone la Presidencia de la Defensoría en su denuncia, el hallazgo antes relacionado denota un posible incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 14 de la LPC. De establecerse lo anterior, se configuraría la infracción al artículo 44 letra a) de la LPC, lo que daría lugar a la imposición de la sanción prevista en el artículo 47 de la LPC.

Mediante el auto de folios 10, se admitió dentro del *procedimiento simplificado* por el incumplimiento al artículo 14 de la LPC y se mandó a oír a la proveedora denunciada para que formulara las alegaciones y presentara los documentos que estimara convenientes, así como para que propusiera la práctica de las pruebas que fueran pertinentes en relación a la infracción administrativa que se le atribuye.

La referida audiencia fue contestada por el licenciado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en su calidad de apoderado general judicial con cláusulas especiales de la sociedad, mediante escrito de folios 12, en el que sostuvo, en esencia, que acepta el hallazgo de productos con posterioridad a su fecha de vencimiento, agregando que el mismo se debió a un error del empleado encargado de revisar las fechas de vencimiento de los alimentos, por lo que solicitó a este Tribunal tener consideración al momento de imponer la multa;

asimismo, aclaró que pondrán especial atención al vencimiento de todos los productos para evitar futuros hallazgos.

Con esta última actuación, y teniendo por concluido el trámite del presente procedimiento, éste queda en estado de pronunciar la resolución final correspondiente, de conformidad con lo estipulado en el artículo 147 de la LPC.

II. A la sociedad Los Ranchos de El Salvador, S.A. de C.V., le ha sido atribuida la infracción al artículo 44 letra a) de la LPC, por ofrecer productos con posterioridad a su fecha de vencimiento, lo que de establecerse daría lugar a la imposición de la sanción que señala el artículo 47 de la LPC.

La supuesta infracción ha sido consignada en el acta de inspección levantada a las quince horas con diez minutos del día veinte de septiembre de dos mil trece, suscrita por los delegados de la Defensoría del Consumidor, Fredy Néstor Roldán Salinas e Iván Oswaldo Ayala Mendoza, y por el señor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, representante del establecimiento.

III. Sobre la conducta atribuida a la sociedad denunciada, este Tribunal hace las siguientes consideraciones:

Respecto de los productos vencidos, el artículo 14 de la Ley de Protección al Consumidor prohíbe ofrecer al público, donar o poner en circulación a cualquier otro título, toda clase de productos con posterioridad a la fecha de vencimiento.

La prohibición en referencia es general para toda clase de productos o bienes objeto de consumo, por lo que el proveedor que ofrezca o ponga a disposición del consumidor cualquier bien que por su naturaleza esté a la venta después de su fecha de vencimiento, es decir, que haya caducado, cae dentro del supuesto en mención, el cual es tipificado como infracción muy grave según el artículo 44 letra a) de la LPC. No debe perderse de vista, que en el mercado se comercializan una diversidad de productos, entre ellos alimenticios, medicamentos, bebidas y de carácter perecedero, cuyo consumo o utilización se debe llevar a cabo dentro del plazo que en los mismos se indica; de lo contrario, cabría la posibilidad que el producto ya no produzca los mismos efectos que podría tener al usarlo dentro del plazo de su vigencia, ni tampoco podría responder a las condiciones que de él se esperan, inclusive, en algunos casos hasta podría poner en riesgo la salud del consumidor que adquiriera, consuma y/o utilice un producto vencido. En razón de lo anterior, la LPC en el artículo 28 inciso 2º, al referirse a cualquier producto perecedero que puedan incidir en la salud, señala que deberá imprimirse en el envase o empaque de los mismos la fecha de vencimiento. Este dato es de vital importancia, pues permite que el consumidor conozca con certeza el límite de tiempo durante el cual un producto todavía conserva sus atributos de calidad, lo cual conlleva la garantía de que el producto no podrá ofrecerse al consumidor después de la fecha de vencimiento indicada en el mismo.

El incumplimiento a la anterior prohibición y que se encuentra contenida en el artículo 14 de la LPC., genera la infracción prescrita en el artículo 44 letra a) del mismo cuerpo legal, el cual literalmente señala que: “Ofrecer al consumidor bienes o productos vencidos o cuya masa, volumen y cualquier otra medida especificada en los mismos se encuentre alterada...”, constituye una infracción muy grave.

De lo anterior se desprende, que dicha conducta ilícita se materializa por el solo hecho de ofrecer bienes o productos en las condiciones señaladas. Para el caso en estudio, el término “ofrecer” a que hace referencia la ley, puede entenderse como el hecho de contar con una serie de bienes y productos dentro de un establecimiento con el ánimo de ofrecerlos al público consumidor; puede también definirse, como el hecho de tener una diversidad de productos dentro de un establecimiento e invitar al consumidor que los adquiera para su uso o consumo. Partiendo de la anterior premisa, el hecho ilícito *tiene lugar cuando dentro de esa variedad de bienes que se ofrecen al consumidor, se encuentran productos cuya fecha de vencimiento ya ha expirado y que por ello ese producto se considera vencido.*

IV. Una vez determinado lo que implica el contenido del artículo 14 de la LPC con relación al artículo 44 letra a) de la misma normativa, se valorará la prueba que consta en el expediente conforme a los métodos aceptados en el ordenamiento jurídico, de forma específica, en la ley de la materia, para posteriormente determinar si en el presente procedimiento, se ha configurado la infracción al referido artículo en perjuicio de los derechos de los consumidores.

El artículo 146 de la LPC, establece que en los procesos ventilados ante este Tribunal, serán admitidos los medios de prueba reconocidos en el derecho común -en lo que fuere aplicable con la naturaleza de éste- y, los medios científicos idóneos.

De conformidad con el inciso final del artículo 146 antes relacionado, las pruebas aportadas en los procedimientos ventilados ante este Tribunal, serán apreciadas según las reglas de la sana crítica, que están basadas en la lógica interpretativa, las máximas de la experiencia y, los conocimientos científicamente avanzados.

Al respecto, el Código Procesal Civil y Mercantil, de aplicación supletoria en el presente proceso (artículo 167 de la LPC), señala que la prueba tendrá por objeto las afirmaciones expresadas por las partes sobre los hechos controvertidos, prueba que, además, debe haber sido obtenida de forma lícita, estar relacionada con el objeto de la misma y ser idónea según las reglas y criterios razonables. En otras palabras, para que una prueba sea valorada debe ser oportuna, pertinente y conducente.

Tomando en cuenta lo antes expuesto, corresponde determinar si la sociedad Los Ranchos de El Salvador, S.A. de C.V., cometió la infracción establecida en el artículo 14 de la LPC, para lo cual será necesario valorar la prueba incorporada a este procedimiento.

1. En principio, es menester aclarar que el acta de inspección suscrita por los delegados de la Defensoría del Consumidor goza de la presunción de veracidad, respecto de las circunstancias de tiempo y forma en las que se practicó la referida diligencia, así como del estado y condiciones observadas en los productos y establecimientos objeto de inspección, mientras no se incorpore en el procedimiento sancionatorio medio probatorio idóneo del que se pueda colegir una información diferente a la de aquélla. En virtud de lo anterior, corresponderá a la proveedora denunciada incorporar la prueba que considere pertinente para apoyar sus alegaciones y desvirtuar el contenido del acta en cuestión, pues, de lo contrario, no le será posible a este Tribunal valorar –por causas imputables a la proveedora– las razones por las que habría incurrido en los ilícitos que se le atribuyen.

2. Sobre el incumplimiento atribuido, el licenciado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en su calidad de apoderado general judicial con cláusulas especiales de la sociedad sostuvo, en esencia, que acepta el hallazgo de productos con posterioridad a su fecha de vencimiento, agregando que el mismo se debió a un error del empleado encargado de revisar las fechas de vencimiento de los alimentos.

3. De lo manifestado por el licenciado xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, se advierte que reconoce la infracción a la LPC denunciada por la Presidencia de la Defensoría del Consumidor, ya que en sus argumentos de defensa no manifestó oposición alguna respecto del hallazgo de productos vencidos, por el contrario, aceptó el hecho atribuido; en ese sentido, el hallazgo consignado en el acta de inspección relacionada, ha sido confirmado con su propio dicho, en consecuencia, ésta adquiere total certeza.

Dando por válida dicha acta, de la misma se desprende que la sociedad Los Ranchos de El Salvador, S.A. de C.V. no tomó las acciones pertinentes para evitar el incumplimiento al artículo 14, como es retirar los productos vencidos separándolos del resto que está apto para la venta, designando un lugar específico para su ubicación (plenamente identificado para este tipo de productos) o verificándolos al momento de recibirlos de su proveedor, y en caso de estar caducados, éstos sean cambiados inmediatamente. Asimismo, el propietario del establecimiento debe asegurarse que en los estantes y congeladores de su negocio solamente se encuentren productos que fueron verificados previamente y, en consecuencia, se hallen aptos para poder ser utilizados y puestos a disposición de los consumidores, a su vez, debe hacer del conocimiento de su personal encargado, los mecanismos de control que se implementan en el establecimiento.

Por lo sostenido, tal situación no la exime de responsabilidad respecto a la conducta que puede configurar una infracción al artículo 14 de la LPC; por el contrario, ésta revela falta de diligencia y cuidado por parte de la proveedora en el desarrollo de las actividades en materia de consumo que en dicho establecimiento se realizan.

Por otra parte, se advierte que aun cuando no haya existido intencionalidad o dolo de parte de la proveedora en incumplir con los mandatos contenidos en la ley de la materia, este Tribunal en múltiples

ocasiones ha establecido que las infracciones administrativas son sancionables aun a título de simple negligencia o descuido, el cual, en el presente caso queda evidenciado por la falta de esmero en retirar oportunamente los productos vencidos documentados en el acta respectiva y verificar el cumplimiento de los mecanismos de control que implementa.

V. Habiéndose comprobado que la proveedora Los Ranchos de El Salvador, S.A. de C.V., incurrió en la infracción contemplada en el artículo 44 letra a), ocasionando una afectación en el derecho a la salud del consumidor, corresponde establecer la sanción que ha de atribuírsele como consecuencia de la comisión de tal ilícito.

1. Para tal efecto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 de la LPC, podrá tomarse en cuenta los siguientes criterios: el tamaño de la empresa, el impacto en los derechos del consumidor, la naturaleza del perjuicio ocasionado, el grado de intencionalidad –dolo o culpa– con la que procedió el infractor, la reincidencia o incumplimiento reiterado, entre otros.

2. En atención a lo expuesto, debe considerarse que la proveedora es una persona jurídica, propietaria del establecimiento inspeccionado, ubicado en el municipio y departamento de San Salvador; y que por el giro de su negocio es imperioso que dicha proveedora atienda a las obligaciones y prohibiciones contenidas en la LPC, con el objeto de garantizar a los consumidores un servicio confiable y de calidad.

Por otra parte, es necesario tener presente que durante la tramitación del procedimiento de mérito, se comprobó que la proveedora incumplió con la prohibición de ofrecer productos vencidos –con un rango de siete días a un mes con veintisiete días de caducados-, atentando contra el derecho a la salud de los consumidores, con lo cual incurrió en la infracción contemplada en el artículo 44 letra a).

De igual manera, si bien no se ha comprobado daño a la salud de forma concreta en una persona particular, se ha valorado el menoscabo de los consumidores de forma potencial, por ofrecerse productos con posterioridad a la fecha de su caducidad; así como, el hecho de que incurrió en tal inobservancia a la ley por no haber actuado con el debido cuidado o diligencia, para verificar que los productos puestos a disposición de los consumidores atendieran los referidos requerimientos, lo que en caso de un establecimiento como el inspeccionado, es aún más grave por cuanto tales productos se pudieran servir en los alimentos preparados de sus clientes.

Por tanto, sobre la base de lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 101 Inciso 2º, 11 y 14 de la Constitución de la República; 8.5 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 14, 44 letra a), 47, 83 letra b), 146 y 147 de la Ley de Protección al Consumidor, este Tribunal **RESUELVE**: a) Sanciónese a la sociedad xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx con la cantidad de DOS MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2,280.00), *equivalentes a diez salarios mínimos mensuales urbanos en la industria*, por la infracción al artículo 44 letra a) de la LPC en relación al

artículo 14. Dicha multa deberá hacerse efectiva en el Fondo General de la Nación, dentro de los diez días siguientes al de la notificación de esta resolución, debiendo comprobar a este Tribunal su cumplimiento dentro del plazo indicado; caso contrario, se certificará a la Fiscalía General de la República para su ejecución forzosa; b) *Tome* nota la Secretaría de este Tribunal, de la dirección señalado para recibir notificaciones; y, c) *Notifíquese*.

“””””IVETTECARDONA “””””J.A.BASAGOITIA “””””L.R.MZ“””””

”””PRONUNCIADA POR LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL SANCIONADOR DE LA DEFENSORÍA DEL CONSUMIDOR QUE LA SUSCRIBEN. “””””C.MORALES.Z“””””FIRMAS RUBRICADAS. “””””

G